

## **LOS LATINOS: INCORPORACIÓN SEGMENTADA Y ADOPCIÓN DE CAUSAS POLÍTICAS PROPIAS**

Los latinos han desafiado todos los mecanismos de integración y las tendencias de asimilación del modelo *melting pot* (o crisol) que tradicionalmente había funcionado para incorporar a los inmigrantes en Estados Unidos. Las comunidades latinas han transformado las dinámicas demográficas y sociales de condados enteros. De manera lenta, pero progresivamente, han aumentado su influencia sobre escenarios políticos más amplios. Como John Mollenkopf y Rafael Sonenshein explican, “los mayores cambios poblacionales siempre han afectado primero a la política local, y tienen un impacto en la política nacional después de un largo camino sinuoso” (2009: 74). Estos patrones coinciden con la incursión política latina en su etapa actual.

Desde el inicio del siglo, Samuel Huntington (2004) auguraba que la hispanización causada por la migración en Estados Unidos amenazaba con erosionar la identidad estadounidense blanca, anglosajona y protestante. El autor concluye que “si la tendencia continúa, se puede producir una consolidación de las áreas predominantemente mexicanas en bloques autónomos, cultural y lingüísticamente distintos y económicamente independientes dentro de Estados Unidos” (Huntington, 2004: 247). Estas ideologías alcanzaron su clímax en 2016, cuando Donald Trump fue elegido presidente, pues basó su campaña en un discurso nativista, antiinmigrante y antilatino que evidenció aún más las posturas de rechazo y cuestionamiento del núcleo social dominante hacia esta minoría étnica que tiene una larga historia de presencia en el país.

Éste es el contexto en que los latinos tienen que interactuar en Estados Unidos. En una encuesta del Pew Research Center (Lopez *et al.*, 2018) se encontró que, desde 2013, se observa un incremento periódico en la preocupación del grupo étnico sobre su lugar en el país. Mientras que sólo un 15 por ciento de los latinos consideraban que la política federal afectaba a sus

comunidades durante la presidencia de Barack Obama, ya en 2018, bajo el mandato de Trump, un 65 por ciento consideró que las políticas aprobadas amenazaban su bienestar en Estados Unidos. Aunque no todos los estadounidenses comparten esas percepciones, los latinos tienen que demostrar continuamente que sus contribuciones son mayores a los desafíos que representan para el país.

La agenda étnica latina y su participación cívica y política están cada vez más sujetas a consideración en la política estadounidense contemporánea. El núcleo dominante tiende a encasillar las prioridades de los latinos a los temas migratorios y los derechos laborales; sin embargo, las encuestas muestran otra realidad: las prioridades de la agenda de los latinos no difieren de las del resto de los estadounidenses. Por ejemplo, en 2018 las prioridades de los latinos fueron: 1) educación, 2) seguridad nacional, 3) economía, 4) sistema de salud y 5) inmigración (Krogstad, Flores y Lopez, 2018). Estas dinámicas nos demuestran que los latinos están cada vez más conscientes de sus ventajas y vulnerabilidades en el país norteamericano.

En este capítulo se analizan los mitos y realidades sobre esta minoría, con especial atención en las innovaciones políticas que, a base de éxitos y fracasos, han desarrollado. Ahora que son la minoría étnica con mayor peso, también están alcanzando mayor madurez política. Los latinos han adoptado causas propias y han gestado una masa crítica en su activismo y en la política institucional; no obstante, también tienen muchos desafíos por delante, como frenar el crecimiento de la brecha socioeconómica, activar políticamente a más latinos y desarrollar la capacidad de llevar sus agendas e iniciativas a otras escalas que les permitan hacer escuchar sus voces más allá de sus enclaves étnicos.

## **Un colectivo étnico de estatus mixto**

Los latinos son actualmente la primera minoría étnica de Estados Unidos en términos demográficos. Representan un colectivo diverso de 59 900 000 personas; el 18.3 por ciento de toda la población del país se identifica como parte de este grupo (U.S. Census Bureau, 2019a). En la actualidad hay un consenso, tanto en la academia como en las organizaciones étnicas, sobre que “latino/a” es meramente una identidad modular para movilizarse colectivamente como un *clúster* (Barreto y Muñoz, 2003; Junn y Haynie, 2008; Masuoka, 2006).

La etiqueta “latino” incluye diversas identidades nacionales, variados indicadores socioeconómicos y múltiples comportamientos políticos. Actualmente, la mayor proporción corresponde a latinos nacidos en suelo estadounidense; solamente 19 500 000 son inmigrantes de primera generación. El grupo nacional más grande son los mexicanos (el 62 por ciento), seguidos por los boricuas (un 9.5 por ciento), los salvadoreños (un 3.9 por ciento) y los cubanos (también con el 3.9 por ciento) (U.S. Census Bureau, 2020b).

Los latinos son un colectivo joven, así que su potencial en el país dependerá del mediano y largo plazos. De acuerdo con las estimaciones de la Oficina del Censo (2019a), seis de cada diez latinos tienen menos de treinta y cinco años en el país, mientras que sólo cuatro de cada diez blancos están en este segmento de edad. En la actualidad, un 79 por ciento de ellos son ciudadanos con derechos políticos y civiles plenos (Pew Hispanic Center, 2019), factor que los convierte en una minoría política significativa por su capacidad prospectiva de movilización.

La población latina está altamente concentrada; tres estados aglutinan al 54 por ciento del colectivo. En el siguiente cuadro se pueden observar los estados con mayor población.

CUADRO 9  
ESTADOS CON MÁS LATINOS

<i>Estado</i>	<i>Población latina (millones)</i>	<i>Población latina (%)</i>
California	15.5	39.3
Texas	11.4	39.6
Florida	5.5	26.1
Nueva York	3.7	19.2
Illinois	2.1	17.4

FUENTE: Elaboración propia con cálculos de U.S. Census Bureau (2020a).

Los latinos tienden a concentrarse en enclaves étnicos en las principales ciudades de estos estados. Únicamente veinte áreas metropolitanas del país concentran al 65 por ciento de todos los latinos, mientras que sólo el 36 por ciento de la población estadounidense vive en esas ciudades (Passel y Cohn, 2017). La concentración geográfica del colectivo latino genera que su incidencia política se pueda dar principalmente en sus entornos local y regional.

Aproximadamente, el 27.2 por ciento de los pobres de Estados Unidos son latinos (U.S. Census Bureau, 2019d), lo cual es una sobrerrepresentación estadística del subgrupo considerando su proporción sobre la población general. La causa de esta circunstancia consiste en que los latinos tienden a ocuparse en las actividades menos lucrativas dentro del mercado de trabajo. Un 66 por ciento de ellos participa en la fuerza de trabajo estadounidense, y constituyen una sexta parte de todos los trabajadores del país (U.S. Bureau of Labor, 2019). Los sectores económicos e industrias donde los latinos predominan son: agricultura, pesca y forestal (el 44 por ciento), construcción y mantenimiento (el 37 por ciento), producción y procesamiento de alimentos (el 24.9 por ciento), servicios de salud (el 23.9 por ciento) y transporte (el 22.1 por ciento).

Los latinos tienen salarios más bajos que el resto de los estadounidenses de todos los niveles educativos. Aunque la educación mejora sus posibilidades de obtener un ingreso más alto, las bajas tasas de permanencia escolar en la educación media superior retrasan el progreso económico del colectivo. De acuerdo con el U.S. Census Bureau (2017a), sólo el 45 por ciento de los latinos que ingresan al bachillerato lo concluyen, y sólo un 21 por ciento de quienes ingresan a la educación superior se gradúan; éstas son las tasas más bajas entre todos los grupos étnicos del país. De acuerdo con Anthony Carnevale y Megan Fasules (2017), los latinos progresaron bien durante la década de 1970 porque el 64 por ciento de los trabajos de la clase media sólo requería un diploma de bachillerato; sin embargo, la transición económica ha provocado que el 79 por ciento de esos mismos trabajos actualmente requiera de un nivel de educación superior.

Paulatinamente, hay más latinos emprendedores. Las empresas latinas generaron 2 800 000 empleos y contribuyeron con 510 000 000 000 de dólares en 2016 (Orozco *et al.*, 2020). Lo cierto es que la mayoría de estos negocios se queda como pequeñas empresas, ya que sólo el 3 por ciento de los negocios latinos mueve más de 1 000 000 de dólares al año. El reto principal de los emprendedores de este origen étnico consiste en asumir mayores riesgos para poder incrementar su influencia en la economía del país.

David Bleeden y otros investigadores (2010) sugieren que uno de los principales argumentos de los grupos antiinmigrantes es la falacia del “hiperciudadano”. Esto surge de un malentendido de los nativistas respecto de que ellos son los únicos contribuyentes de impuestos, y por esa razón deben ser

los dueños del gobierno y los únicos beneficiarios de las políticas públicas. En respuesta a esto, las organizaciones latinas han creado campañas denominadas “justicia tributaria”: a través de la promoción publicitaria y de eventos buscan informar al núcleo social mayoritario de sus contribuciones a la fuerza de trabajo, a la economía y al sistema de seguridad social.

Los opositores de los inmigrantes están buscando que la idea de que son “carga pública” se aplique en los procesos de naturalización y ciudadanía. Esto significa que, si una persona muestra indicadores de poder convertirse en dependiente de apoyos gubernamentales —ya sea por discapacidad, enfermedad, desempleo o pobreza—, se le podrá negar la admisión al país e incluso se convierte en sujeto de deportación. De aplicarse esta regla, afectaría principalmente a los hogares latinos monoparentales con hijos dependientes y a los latinos beneficiarios del Medicaid.

Es particularmente llamativo el estancamiento socioeconómico que experimentan los latinos a partir de la segunda generación. Históricamente, los migrantes latinos de primera generación se insertaron exitosamente en los trabajos de cuello azul, principalmente en el campo y en las fábricas, y mejoraron su estatus económico a través del trabajo arduo; sin embargo, para sus hijos y nietos nacidos en Estados Unidos el estancamiento económico es un común denominador. Los jóvenes latinos están presentando problemas como una tasa alta de embarazo adolescente equivalente al 28.9 por ciento (U.S. Department of Health and Human Services, 2019), una de las proporciones más bajas de graduación del bachillerato con un 45 por ciento (Carnevale y Fasules, 2017), y el 15.5 por ciento de los jóvenes latinos entre dieciocho y veinticuatro años ni estudian ni trabajan (Fry, 2019a).

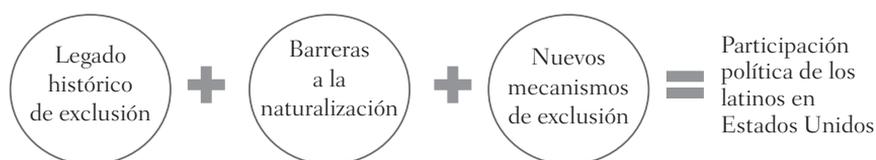
La situación socioeconómica de los latinos responde a causas estructurales. La mayoría habita en barrios plagados de crimen y olvidados por los proyectos de regeneración urbana, barrios que los estadounidenses blancos sólo ven en las películas. Los problemas socioeconómicos de los latinos no se pueden solucionar sin su inclusión en el diseño político de alternativas. También debe considerarse que en Estados Unidos la política del dinero tiene mucha influencia y si el grupo aún no tiene suficiente peso económico sólo puede utilizar su capital demográfico y social para tratar de incrementar su influencia en la política nacional.

## “Aquí estamos y no nos vamos”: la articulación de una minoría política étnica

La incorporación política de los latinos no puede entenderse sin considerar las experiencias formativas de los migrantes de primera generación en sus países de origen y las habilidades adquiridas por parte del colectivo en el seno de sus organizaciones étnicas en su lugar de residencia. Dentro de los estudios pioneros en el campo, Portes y Zhou (1993) sugirieron tres posibles caminos para la integración de las comunidades latinas en Estados Unidos: una primera vía consistía en la aculturación hacia el núcleo social dominante blanco y la subsecuente asimilación unilateral hacia este sector; la segunda, en la adopción de la cultura de subordinación/emancipación de los negros y una alianza de clase con este grupo racial; la tercera vía era una conciencizada retención de valores étnicos e historia migratoria para generar una identidad propia. A través de los años y con la articulación de una identidad política latina, estas comunidades parecen haber favorecido el desarrollo de esta tercera vía.

La fórmula clave para entender los elementos constitutivos de la identidad política latina se aprecia en la siguiente figura.

FIGURA 4  
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA IDENTIDAD POLÍTICA LATINA



FUENTE: Elaboración propia.

Hay tres características *sine qua non* que identifican a las comunidades latinas en Estados Unidos: la primera es la lengua española,<sup>1</sup> la segunda es un pasado colonial y la herencia cultural del mestizaje, y la tercera es la experiencia

<sup>1</sup> Para los latinos como minoría, el español, el *spanglish* y en menor medida el inglés son los lenguajes primarios de socialización política. Si bien hay una gran proporción de inmigrantes de pueblos indígenas y de comunidades caribeñas que utilizan sus lenguas en el seno de sus organizaciones de paisanos, esto no se replica en las manifestaciones masivas, en los mítines y tampoco en los discursos de la política latina.

migratoria. Ahora bien, a estas condiciones intrínsecas de las comunidades también se agregan otras experiencias más contestatarias, resultado del asentamiento en ese país, como lo son la discriminación, el cuestionamiento de sus demandas de grupo, la exclusión civil y la supresión política sistemática. Todos estos elementos, en su conjunto, han contribuido a forjar una identidad política latina plagada de contradicciones y desventajas, pero presente en la esfera pública estadounidense contemporánea.

En 1930, la Oficina del Censo de Estados Unidos incluyó *Mexican* por primera vez como categoría racial.<sup>2</sup> En ese momento, los mexicoamericanos consideraban que esta categoría estigmatizaba a sus comunidades. Aquellos latinos con plenos derechos civiles preferían evitar ser sujetos de segregación racial ante la posibilidad de no ser beneficiarios de acción afirmativa. La principal oposición provino de las comunidades mexicoamericanas más antiguas, a quienes la frontera estadounidense había cruzado y trataban de adscribirse a la población blanca, evitando así la segregación racial a la que estaban sometidas las comunidades asiáticas y negras en los estados del sur de aquel país (Gómez-Quñones, 1990).

Fue hasta el censo de 1970, una vez mermados los movimientos por los derechos civiles y en pleno auge de los programas de acción afirmativa, que se incorporó una pregunta al censo que cuestionaba sobre si el encuestado que seleccionaba la categoría racial “blanco” era de origen hispano (Casellas, 2011; Stokes, 2012). La definición de “latino” en el censo establece que ese grupo panétnico incluye a personas de origen o cultura mexicana, puertorriqueña, cubana, centro o sudamericana, independientemente de la raza.

Desde entonces y gracias al *lobby* de las comunidades migrantes, la raza y la etnia pueden ser reportadas de forma separada en el censo estadounidense. Esto se ha convertido en un arma de doble filo en las políticas públicas, porque los programas de acción afirmativa y otras formas de justicia social se siguen formulando sobre una base racial en ese país norteamericano. Frecuentemente, las vulnerabilidades de los latinos se diluyen dentro del grupo racial blanco, a pesar de las profundas desigualdades socioeconómicas.

<sup>2</sup> En Estados Unidos se tratan de forma similar la raza y la etnicidad, a tal grado que las fronteras conceptuales resultan conflictivas. Si bien la raza se refiere a condiciones fenotípicas y la etnicidad a la cultura, la racialización histórica y la segmentación social han tenido como consecuencia que tanto grupos raciales como étnicos tengan una historia, un destino común y conciencia de grupo (Leighley, 2001; Masuoka, 2006; Nivola y Brady, 2008).

A diferencia de los afroamericanos y las mujeres respecto de las enmiendas constitucionales, los latinos no tienen un punto histórico único de entrada en el sistema político estadounidense, sino que lenta y progresivamente han ido desarrollando una conciencia de grupo. Dos factores han contribuido a forjar su identidad política: el primero se relaciona con el destino común o *linked fate* (Huddy, 2015); el segundo tiene que ver con amenazas comunes como la discriminación, el odio racial, el nativismo, la criminalización y la estigmatización de grupo (Giles y Hertz, 1994; Stokes, 2003). Esto, en conjunto, ha creado movimientos de solidaridad para mejorar su estatus, pero también acciones políticas más contestatarias frente a inminentes desventajas y amenazas.

Los dos antecedentes principales de la organización cívica y política latina se encuentran en el movimiento por los derechos de los trabajadores agrícolas protagonizado por César Chávez y Dolores Huerta, y en el antisistémico movimiento chicano.

El movimiento por los derechos agrícolas se refiere a la acción colectiva desarrollada entre las décadas de 1960 y 1970, que incluyó huelgas, boicots y protestas en los campos de California en contra de las indignas condiciones laborales y paupérrimos salarios de los campesinos (Jenkins, 1985). Estos activistas fundaron los capítulos de las Organizaciones de Servicio a la Comunidad para los Hispanos de California y la Asociación Nacional de los Trabajadores Agrícolas. Curiosamente, este movimiento era antiinmigrante: los líderes (de origen extranjero) consideraban que los migrantes deterioraban las condiciones laborales de los demás trabajadores agrícolas debido a su imposibilidad de exigir derechos, por aceptar bajos salarios y por ser usados como “rompehuelgas” por los patrones. Aun así, “la lucha” y “la causa” forman parte del vocabulario contemporáneo del activismo latino que ha sido retomado de los discursos de los líderes.

Paralelamente, entre 1960 y 1980, también floreció un ala más radical en la politización colectiva: el movimiento chicano. Este movimiento incluía a intelectuales, activistas y artistas que visibilizaban la situación de desventaja, discriminación y segregación que enfrentaban las comunidades de origen mexicano en Estados Unidos (Muñoz, 1989). Como el famoso poema de Abelardo Delgado (1969) recita en su metáfora sobre la indiferencia hacia el colectivo: “Estúpida América, escucha a ese chicano gritando maldiciones en la calle. Es un poeta, sin papel ni lápiz, y como no puede escribir, explotará”. Los chicanos protestaban por medio de la acción colectiva y a través

de su obra artística en contra del sistema educativo, contra el imperialismo estadounidense y la guerra; llevaban a cabo boicots y huelgas en contra de las corporaciones (Keefe y Padilla, 1987). Estos movimientos se realizaron en regiones muy específicas y fuera de las instituciones políticas, ya que se basaban en el activismo local.

Una vez que los inmigrantes son separados de la política de sus países de origen, la mayoría no se une automáticamente a la política estadounidense. Louis DeSipio (1996) explica que si los inmigrantes son desmotivados para integrarse y no pueden regresar a sus lugares de origen, sus percepciones políticas estarán determinadas por su posición de *outsider* político. De esta forma, su entendimiento de la realidad política que los circunda y sus herramientas organizativas estarán dadas en términos de su etnicidad distintiva y probablemente en contra del orden político existente.

En 2006, Estados Unidos experimentó las más grandes y espontáneas movilizaciones de su historia. Estas manifestaciones multitudinarias fueron organizadas por los latinos. Basados en las estimaciones de los medios y las organizaciones, numerosos autores reportaron que, entre el 10 de marzo y el 1° de mayo de 2006, cerca de tres millones quinientas mil personas participaron en las protestas masivas contra la criminalización de los inmigrantes y la estigmatización de las comunidades latinas (Robinson, 2006; Vonderlack-Navarro, 2014). Protestaban contra la *Border Protection, Anti-terrorism and Illegal Immigration Control Act* (HR 4437-2005), conocida como la Ley Sensenbrenner, que ya había sido votada favorablemente en la Cámara de Representantes y sería enviada al Senado. Esta ley criminalizaba la inmigración obligando a los empleadores a usar el programa E-Verify, penalizaba a quienes contrataran migrantes indocumentados, multaba a estos últimos con tres mil dólares antes de ser deportados, proponía la construcción de un muro en la frontera con México y comisionaba un estudio para evaluar la factibilidad de edificar otro en la frontera con Canadá.

Esta “primavera del inmigrante” significó una nueva etapa del movimiento por los derechos civiles y políticos de los latinos en Estados Unidos (Pallares y Flores-González, 2010); sin embargo, como Rufus Browning y otros autores (1984) anticipaban en un trabajo pionero, la protesta por sí sola no es suficiente para la incorporación política de este grupo. Rebecca Vonderlack-Navarro (2014) describe las divisiones al interior del comité coordinador de la “primavera del inmigrante”: un sector buscaba que la visibilidad alcanzada

por las marchas les abriera camino en sus relaciones transnacionales con sus países de origen, ya que creían que era imposible poder cambiar las leyes del país del que sólo eran residentes. Otra corriente no quería dar marcha atrás al movimiento de politización y buscaba avivar permanentemente el activismo latino en Estados Unidos.

En una de las discusiones entre los organizadores de la “primavera del inmigrante”, uno de los activistas manifestó: “México está muy lejos de aquí, a muchos kilómetros. Aquí es donde estamos, y están a punto de aprobar una ley que te va a convertir en un criminal, ¿y sigues pensando en votar en las próximas elecciones de México?” (Vonderlack-Navarro, 2014: 94). Es así como el colectivo empezó a cobrar conciencia de la necesidad de adoptar causas políticas propias en Estados Unidos.

En el caso particular de algunas ciudades donde los colectivos ya están socialmente establecidos y articulados al interior por organizaciones vocales, se ha venido desarrollando una masa crítica que está guiando la incorporación política del colectivo al interior y al margen de las instituciones formales. Por ejemplo, una activista latina explica: “Nuestras organizaciones aquí en el estado de Illinois tienen una doble responsabilidad. Somos responsables de organizar la resistencia de los inmigrantes, pero también de crear marcos normativos en el ayuntamiento, las cortes y los capitolios” (discurso, ICIRR Chicago, abril de 2017).<sup>3</sup> Los latinos están cada vez más motivados para generar estrategias de incidencia; esto les ha permitido aprender más sobre el sistema político, sus convenciones y reglas; no obstante, sólo la presencia de voceros políticos efectivos les garantizará un aumento progresivo de *responsividad* gubernamental y mayor justicia social.

## **Mitos y realidades del capital político latino en Estados Unidos**

Como resultado de la estabilización de la minoría latina a partir del engrasamiento del segmento que goza de derechos políticos plenos, empezaron a emerger numerosos estudios que vaticinaban un creciente impacto del voto

<sup>3</sup> Todas las entrevistas y las observaciones respecto de estos discursos fueron hechas por mí por medio de trabajo de campo, y están contenidas en Cruz (2018). Por ética, los nombres de los entrevistados se mantienen anónimos, ya que son políticos y activistas de la ciudad de Chicago.

latino en las elecciones estadounidenses (Barreto, 2007; Ramírez, 2005). Jason Casellas (2011) explica que, debido a que los latinos son recién llegados a la política de la Unión Americana, el efecto de los periodos legislativos y la asistencia a las urnas demandan atención. Ciertamente, existe un incremento en el capital político latino; sin embargo, también hay varios mitos que es necesario desentrañar.

El primero es sobre el cambio demográfico causado por los latinos, que tendría como resultado una expansión del electorado étnico. Si bien, desde el 2000 los latinos son responsables de la mitad del crecimiento de la población estadounidense, que ha aumentado un 2 por ciento anual (Passel y Cohn, 2017), como anteriormente se explicó, la mitad de esta población está concentrada en California, Texas y Florida. Por tanto, el llamado cambio demográfico en el país es un mito, ya que no es una dinámica nacional sino local. Estos estados siempre han tenido importante presencia latina y lo que están aumentando son los distritos minoría-mayoría. Además, si nos centramos en la tasa de crecimiento y no en la magnitud, los condados con mayor cambio demográfico están en Dakota del Norte, Georgia y Alabama, donde no hay una incipiente política latina que politice a estos nuevos residentes, que allí son una minoría que se diluye fácilmente.

El segundo mito se relaciona con la afiliación partidista; frecuentemente se da por sentado que los latinos son demócratas sólidos. Las estadísticas demuestran que en la primera década del siglo XXI, la tasa de votantes latinos registrados como demócratas ha fluctuado entre el 49 por ciento en 2006 y el 70 por ciento en 2012 (Lopez *et al.*, 2016). Trabajos pioneros como el de Juan Gómez-Quiñones (1990) y textos más contemporáneos (Barreto, 2007; Casellas, 2011; Huerta y Santos, 2016) han explicado que la ideología política no es monolítica dentro del colectivo.

En general, los latinos son centristas con tendencias liberales progresistas. Tanto republicanos como demócratas tienen fuerzas centristas; por lo tanto, también encontramos variaciones regionales en la afiliación partidista. Leonie Huddy y otros investigadores (2016) encontraron que mientras el porcentaje de latinos que se identifica con los demócratas se ha mantenido constante desde la década de 1980, ha pasado lo contrario en el caso de la minoría dentro de la minoría que se identifica como republicana; este sector va en descenso desde 2004; la propia actitud excluyente del Partido Republicano está empujando a los latinos hacia el Partido Demócrata. Además, históricamente

los demócratas han desarrollado maquinarias políticas para canalizar hacia sus bases a futuros ciudadanos recién llegados.

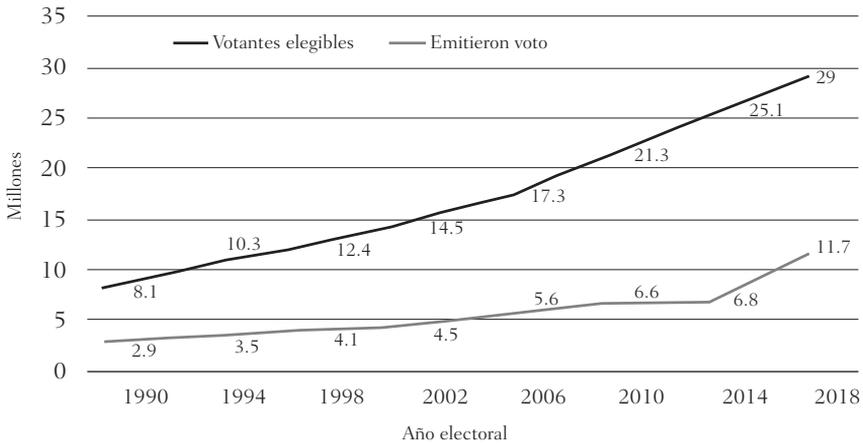
Aunado a lo anterior, en el espectro de la política latina la nacionalidad de origen y la clase son variables que también influyen en la afiliación partidista. En un estudio comparativo entre los subgrupos latinos, Atiya Stokes (2012) encontró que los puertorriqueños fueron los más interesados en la política y los mexicanos son quienes tienen tasas de confianza en el gobierno más altas. Debido a cuestiones históricas relacionadas con las promesas de autonomía de la isla y el reconocimiento de sus derechos políticos, los puertorriqueños suelen ser sólidos demócratas, mientras que los cubanos son clientela republicana (Casellas, 2011).

El tercer mito sobre la creciente influencia del voto latino se relaciona con que sólo una parte del colectivo está activa en la política. En primer lugar, los latinos son un grupo de estatus migratorio mixto que incluye inmigrantes irregulares, residentes permanentes, ciudadanos naturalizados y ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Sólo los últimos dos perfiles pueden votar y ser votados. Los latinos tienen bajas tasas de naturalización y los mexicanos aún más: sólo el 53 por ciento de los residentes permanentes elegibles nacidos en México se había naturalizado para 2018, mientras que el promedio nacional fue del 73 por ciento. También, los latinos tienen tasas reducidas tanto de registro como votantes como de asistencia a las urnas; estas tendencias pueden observarse en la gráfica 9.

Los datos anteriores se explican por múltiples factores que van desde la apatía (sobre todo en los votantes más jóvenes) hasta sofisticadas técnicas de supresión electoral a las que son sometidos. Aun así, los esfuerzos de movilización de votantes están funcionando; se estima que en las elecciones de 2020 hasta quince millones de latinos emitieron su voto y que fue el grupo étnico que tuvo la tasa más alta de crecimiento electoral (Unidos U.S., 2021).

Hay tres perfiles que destacan dentro del electorado latino en Estados Unidos (DeSipio, 1996). Primero están aquellos latinos, regularmente en edad laboral, que se registran como votantes, pero no acuden a las urnas. Luego tenemos a quienes son ciudadanos estadounidenses, pero ni siquiera se registran como votantes por apatía o por falta de cultura cívica. Finalmente está el grupo de residentes permanentes que no se ha naturalizado a pesar de ser elegibles y, por tanto, no tienen derechos políticos.

GRÁFICA 9  
EL VOTO LATINO



FUENTE: Elaboración propia con datos del Pew Research Center (2019).

En sus estudios sobre el capital político de los latinos en distintas geografías, Christopher DeSante y Brittany Perry (2015) encontraron que la dimensión del colectivo étnico en determinado lugar influye mucho para disminuir las brechas de conocimiento y aumentar la participación política. Más conocimiento y mayor interés en la política incrementan también la representación descriptiva. Sí es un hecho que la política latina está floreciendo, aunque el citado potencial del “gigante dormido” —como los activistas y políticos denominan al capital político latino— no puede ser totalmente explotado por las causas intrínsecas y extrínsecas señaladas en esta sección.

### Subrepresentación gubernamental y política institucional

Los candidatos de las minorías visibles generalmente se enfocan en su grupo étnico como base de apoyo; de este modo, refuerzan la identidad compartida de esa minoría. La presencia de un candidato latino que utilice un discurso de política identitaria en una elección tiene como efecto inmediato una mayor movilización de la comunidad, un aumento de los votantes de las minorías y el ingreso de intereses minoritarios a la esfera pública. Como Matt Barreto

(2012) explica, aunque los latinos ya cuentan con bases para cohesionar su identidad de grupo y son, en cierto grado, conscientes de su estatus desaventajado en la política formal, la presencia de un candidato étnico viable y vibrante siempre es una fuente inmejorable de politización colectiva.

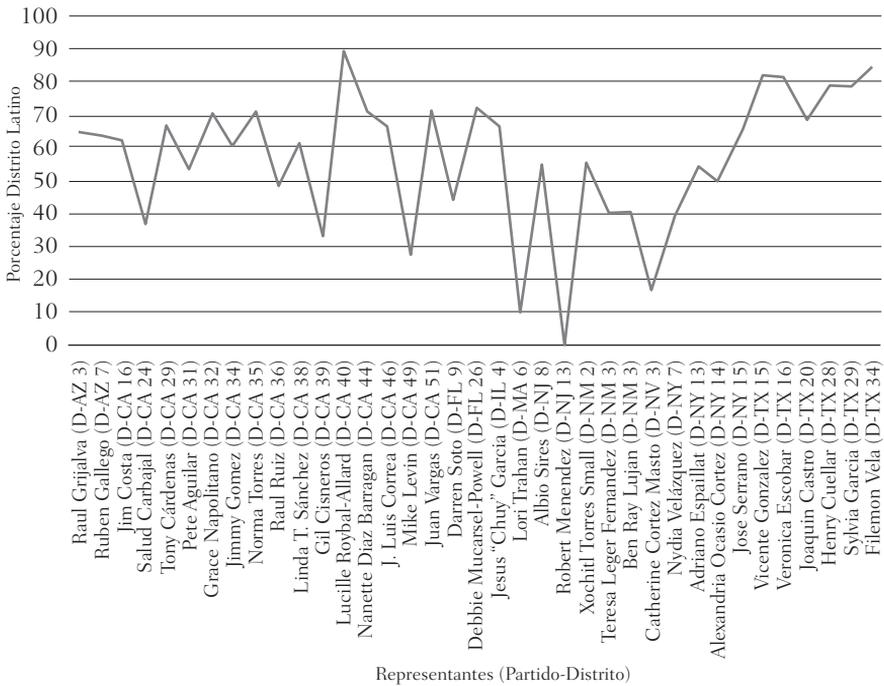
En 1960, Henry B. González se convirtió en el primer congresista latino electo por un distrito predominantemente de ese origen étnico en el área de San Antonio, Texas. Para 1970, ya había cuatro congresistas latinos de tres diferentes estados (Barreto, 2012). Dos organizaciones fueron vitales en esta etapa de surgimiento de la política latina formal: en 1976, se creó el Congressional Hispanic Caucus, con el objetivo de dar voz y hacer progresar su agenda política en las instituciones gubernamentales estadounidenses. La segunda organización es la National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO), que funge como un instituto de liderazgo y un fondo educativo para apoyar y empoderar a los políticos latinos.

Hay una línea continua que vincula el activismo comunitario de los latinos con su incursión en la política institucional estadounidense. En un exhaustivo trabajo de campo realizado con organizaciones políticas étnicas en Illinois, California y Texas entre 2016 y 2020, encontré que existen dos canales de acceso principales para los jóvenes políticos latinos: la primera vía proviene de su experiencia previa como organizadores de bases sociales en asociaciones cívicas y comunitarias, a partir de las cuales van haciendo vínculos con los políticos; el segundo camino es trabajando como enlace con las comunidades latinas para las oficinas de otros políticos ya electos. En general, los latinos consideran que la mejor forma de aprender las convenciones políticas es directamente practicando y llevando sus agendas étnicas a los corredores del poder.

En 2017, NALEO creó un directorio de políticos latinos y encontraron un total de seis mil seiscientos en todos los niveles de gobierno del país. De acuerdo con la organización Latino Victory (2019), la proporción total de la representación latina en cada nivel de gobierno es muy baja: un 5 por ciento en oficinas subestatales (distrito, condado, municipalidad), el 4 por ciento en asambleas estatales y gubernaturas, un 3 por ciento en el Senado y el 7 por ciento en la Cámara de Representantes.

La siguiente gráfica muestra a los congresistas latinos que se desempeñaron en la Cámara de Representantes en 2019-2020. También se indica el porcentaje de población latina estimada por la Oficina del Censo en esa circunscripción.

GRÁFICA 10  
 REPRESENTANTES LATINOS EN LA CÁMARA (2019-2020)



FUENTE: Elaboración propia con datos del Congressional Hispanic Caucus (2019) y de U.S. Census Bureau (2019c).

Como se puede observar en la gráfica, la mayoría de los congresistas latinos son elegidos para representar distritos étnicos. La mayoría de los representantes provienen de los estados en que los latinos están más concentrados; lo anterior ilustra la paulatina incorporación a la política formal del colectivo desde sus ámbitos inmediatos, que son sus distritos.

Por otro lado, en la legislatura 116 sólo hay cuatro senadores latinos, la mayoría proveniente de estados donde este segmento poblacional tiene una mayor influencia demográfica: Marco Rubio, republicano por Florida, cuyo electorado es un 29.8 por ciento latino; Ted Cruz, republicano por Texas, con el 19.8 por ciento; Catherine Cortez Masto, demócrata por Nevada, con un 19 por ciento y Robert Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, con un 14.8 por ciento.

Varios factores permiten explicar que haya tanta diferencia en la representación descriptiva de los latinos en la Cámara de Representantes y en el Senado, entre ellos, los mecanismos con los que se diseñan las circunscripciones. Los latinos están concentrados en distritos minoría-mayoría sobre los que tienen influencia política para enviar a representantes étnicos; en cambio, los senadores representan a los estados, y en ese nivel sus posibilidades se reducen a aquellos que concentran tasas significativas de votantes latinos o a aquellos en los que sean capaces de establecer coaliciones étnicas. Jason Casellas y David Leal (2011) explican que los senadores tienen un electorado más diverso, por lo que difícilmente su carrera política descansa en un solo grupo étnico, cuestión que sí caracteriza a los representantes latinos electos para la Cámara.

El mayor desafío para los políticos latinos consiste en ganar las elecciones primarias de sus partidos. Los latinos son una minoría con capacidad de movilizar grandes números de votantes desde vecindarios inmersos en distritos demócratas. Los políticos latinos usualmente utilizan estrategias similares; por ejemplo, contratan a jefes de campaña y asesores políticos latinos, normalizan el uso del español como lengua franca durante la campaña, conducen eventos electorales bilingües, desarrollan programas de recaudación de fondos apoyados por organizaciones étnicas; además, recurren a la discusión de la influencia de su cultura y de su legado migratorio en su decisión de participar en la política formal.

En su estudio comparativo sobre elecciones para alcalde en Los Ángeles, Houston, Nueva York, Denver y San Francisco, Matt Barreto (2012) encontró que en todos los casos el voto latino favoreció al candidato étnico por encima del 80 por ciento; sin embargo, sólo el candidato de Nueva York logró la mayoría del voto negro, y el de Denver la mayoría del voto de los asiáticos; en los demás casos no se alcanzó ni siquiera el 50 por ciento del voto de las otras minorías. Estudios como éstos nos demuestran que no hay un patrón para predecir los escenarios en los que los latinos se aliarán políticamente con grupos étnicos blancos o negros. Sólo concentrándonos en el análisis de importantes ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Chicago podemos ver que las alianzas han fluctuado dependiendo de la plataforma que el candidato en cuestión esté representando.

Leonie Huddy y otros autores (2016) argumentan que la identidad política latina, a pesar de la diversidad ideológica al interior, ha funcionado para

movilizarse como bloques electorales en espacios localizados, pero también para defender el estatus del grupo étnico a nivel nacional. Por ejemplo, un líder latino explica:

Nuestra comunidad debe saber que no participar sólo beneficia a la estructura, a su maquinaria. Por ejemplo, no informarse, no organizarse, no postularse o no votar nos afecta. Ellos ya tienen los números de quienes participan y quienes tienen influencia; a veces los políticos sólo trabajan para hacer felices a esos cuatro o cinco mil en un área geográfica donde pueden vivir hasta cien mil personas (discurso, Chicago, marzo de 2018, en Cruz, 2018).

En respuesta a las disposiciones del sistema que abre nichos para la participación de aquellos grupos que están organizados, los líderes étnicos constituyen la masa crítica que motiva a las bases para participar activamente en la política local.

### **Reforma migratoria y ciudadanía como escenarios de politización**

La identidad latina se articula a partir de las dinámicas intrínsecas de socialización política del colectivo y de factores extrínsecos propios del contexto más amplio en el que se desarrollan. Por ejemplo, sólo por tener un apellido hispano y fenotipo latino, la identidad política de los miembros de esta minoría se reduce a la migración por parte del *mainstream* estadounidense. Como una líder migrante explica: “nos llaman migrantes de primera, segunda y hasta tercera generación. La pregunta es, ¿cuándo vamos a dejar de ser migrantes y ser considerados de aquí?” (entrevista, Chicago, mayo de 2017, en Cruz, 2018). Los latinos son una minoría permanentemente cuestionada en Estados Unidos, aunque esta nación se autodenomina como país de migrantes. Sus derechos son puestos en duda siempre bajo sospecha de su estatus legal, sus reclamos son descalificados por los nativistas, su legitimidad pública es cuestionada y su ideología política estereotipada por las elites.

Ciertamente, la migración irregular es un tema central para los latinos, ya sea por afectarlos directamente o por temer la deportación de sus familiares y amigos cercanos (Genova y Ramos-Zayas, 2003); sin embargo, la masa crítica latina ve en la política migratoria una fuente de estigmatización del colectivo y

un mecanismo de racismo validado institucionalmente. Por ejemplo, una líder comunitaria latina explica:

Hay políticas que mantienen indocumentadas a nuestras comunidades porque los dos partidos y el sistema opresivo se benefician de nosotros. Por ejemplo, aquí en Chicago dependemos del trabajo que no está bien pagado y del trabajo de los inmigrantes. Algunos políticos dicen: “Estoy a favor de los inmigrantes, (*pero no hago nada para ayudar*)”. Otros dicen: “Estoy en contra de los inmigrantes”, y afectan a nuestras comunidades. De esta manera, ambas partes pueden movilizar sus bases en nuestro nombre (entrevista, Chicago, mayo de 2017, en Cruz, 2018).

En la actualidad, hay un consenso respecto de que el sistema migratorio del país es incapaz de gestionar el ingreso de los trabajadores extranjeros que la maquinaria de la economía más grande del mundo requiere. El problema es que los diversos sectores sociales no han podido llegar a un acuerdo sobre los mecanismos bajo los cuales debe operar dicha reforma. Un amplio sector apuesta por una migración altamente selectiva, e incluso un grupo nativista y xenófobo apoya una deportación masiva de todos los latinos. La migración se posiciona como uno de los temas más divisivos en el espectro político a todos los niveles.

Contrario a lo que pudiera pensarse, se ha encontrado que el 36 por ciento de los blancos que responden las encuestas y el 26 por ciento de los latinos apoyan la deportación de los inmigrantes indocumentados (Levy *et al.*, 2016). También se reporta que el 88 por ciento de los blancos y el 65 por ciento de los latinos apoyan que los contratistas revisen el estatus migratorio de sus empleados. Estas actitudes de los latinos se explican debido a que consideran que el problema de la inmigración es sistémico y que no se está haciendo nada para crear un sistema migratorio más competente. El tema de máxima convergencia fue en torno a que el 82 por ciento de los blancos y el 92 por ciento de los latinos consideran que debe ofrecerse una vía de regularización para los inmigrantes indocumentados que actualmente están viviendo y trabajando en el país.

Además de esta polarización en las percepciones públicas, encontramos que la gobernanza migratoria de Estados Unidos se basa en la encomienda al gobierno federal sobre el control de visitantes y fronteras, mientras que se delega a las localidades el mandato de incorporar a los inmigrantes. Esta superposición de facultades es conflictiva en escenarios como el actual, en que el

gobierno federal que recién terminó su periodo fue antiinmigrante, y en contraste, muchos gobiernos locales progresistas son conscientes de que la vitalidad de sus áreas urbanas y sus campos depende de los inmigrantes. En este contexto de parsimonia del gobierno federal hacia un proceso de reforma migratoria han surgido tanto leyes locales proinmigrantes como también numerosas ordenanzas dirigidas a restringir la migración indocumentada.

En el caso de las leyes antiinmigrantes federales que posicionan a la migración como una amenaza a la seguridad nacional, encontramos la anteriormente citada Ley Sensenbrenner de 2005 y la “política tolerancia cero” de Trump. En relación con las respuestas locales y estatales que estigmatizan a los latinos como una amenaza para la seguridad pública de las comunidades en las que se asientan, encontramos la Ley Arizona (SB1070) de 2010, el Programa de Comunidades Seguras (Secure Communities, S-Comm) de 2009 y la Ley Antisantuuario de Texas (SB4) de 2018.

La “Ley Apoye Nuestras Fuerzas de Orden Público y los Vecindarios Seguros” es mejor conocida como la Ley Arizona (SB1070) a nivel internacional, y frecuentemente se refieren a ella como la Ley Odio en Estados Unidos. Esta ley estatal estuvo en vigor entre julio de 2010 y abril de 2011. Permitía a la policía estatal detener a cualquier persona bajo la sola sospecha de que fuera un migrante indocumentado y tipificaba como delito menor que un extranjero no portara prueba de su estancia legal en el territorio. Esta ley fue declarada inconstitucional por un comité de apelaciones debido a que se basaba en el perfil racial, además de que el control migratorio es una competencia federal que no pueden asumir las localidades de forma unilateral.

Por su parte, el Programa de Comunidades Seguras estuvo vigente entre 2009 y 2011 y luego fue restaurado por Trump en 2017. Consistía en la firma de acuerdos de cooperación de las localidades con la Oficina de Control Migratorio (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) para que las oficinas públicas locales informaran sobre la presencia de indocumentados y para que la policía local apoyara en actividades de reforzamiento anti-migratorio. De forma similar, la Ley Antisantuuario de Texas (SB 04) de 2018 penaliza a los ayuntamientos que aprueben leyes que restrinjan la cooperación local con las operaciones de ICE.

Estos contextos de hostilidad hacia los migrantes y de estigmatización hacia las comunidades latinas que privan en varios niveles de gobierno han tenido como resultado la reacción de las organizaciones étnicas latinas. Sophia

Wallace y Chris Zepeda-Millan (2018) encontraron que los latinos consideran que, ya que en el pasado la protesta ha servido para detener políticas que afectaban a sus comunidades, la movilización debe continuar como estrategia comunitaria en la actualidad. De este modo, sin que la migración sea una de las prioridades más urgentes de la agenda política de los latinos —como sí lo es el bienestar de sus comunidades (Krogstad *et al.*, 2018)—, el asunto migratorio se ha convertido en uno de los temas que monopolizan su acción cívica en Estados Unidos.

Una causa que ha despertado el apoyo de la comunidad en su conjunto ha sido el activismo desplegado por los grupos de jóvenes migrantes *dreamers* (llamados así por la Ley para el Desarrollo, Alivio y Educación de Extranjeros Menores de Edad —Development, Relief and Education for Alien Minors, o *DREAM Act*—). A pesar de sus múltiples vulnerabilidades (ser jóvenes, pertenecer a una minoría étnica y ser indocumentados), los *dreamers* articularon un movimiento importante en la política contemporánea de Estados Unidos. Así, los *dreamers* lograron politizar a un sector considerable de la juventud estadounidense, la juventud latina, que parecía estar aletargada.

El Día de la Raza de 2011, un grupo de jóvenes activistas recién graduados se presentó en la oficina de ICE en Los Ángeles para demandar que se pusiera fin a la deportación de jóvenes que llegaron siendo niños o en brazos de sus padres a Estados Unidos, sin capacidad de decisión propia de migrar (Enriquez y Saguy, 2016). A partir de esto, inició un llamado en redes sociales para “salir de las sombras”, compartir testimonios y participar en acciones colectivas para presionar por la regularización. Se conformaron organizaciones a lo largo del país, principalmente en las universidades, para buscar una respuesta gubernamental a sus demandas.

Entre 2008 y 2012 se introdujeron sin éxito múltiples versiones bipartidistas de la *Dream Act* en el Congreso estadounidense. Fue a finales de 2012 cuando Barack Obama firmó la orden ejecutiva *Deferred Action for Childhood Arrivals* (DACA), que prohíbe la deportación y concede un permiso de trabajo a los jóvenes *dreamers*. Los requisitos que se establecieron para poder ser beneficiario del programa fueron los siguientes: que tuvieran menos de treinta y cinco años al momento de la entrada en vigor de la orden, que hubieran llegado en la infancia, que se hubieran graduado por lo menos de la preparatoria o que hubieran servido en las fuerzas armadas, y que no tuvieran antecedentes penales. Alrededor de ochocientos cincuenta mil jóvenes, la mayoría

latinos y un 76 por ciento del total mexicanos, se beneficiaron (Wong, 2017). Además de no ser sujetos de deportación, de poder salir del país y regresar, tenían la posibilidad de acceder a la universidad y mejorar sus condiciones de vida al tener un permiso de trabajo; sin embargo, la llegada de Trump a la presidencia amenazó la vigencia de la orden ejecutiva. En septiembre de 2017 Trump firmó otra orden ejecutiva para detener los efectos de DACA, ya que consideraba que el programa era ilegal. La batalla legal para defenderlo se llevó a cabo simultáneamente por varias organizaciones en varias cortes federales de distrito. Los estados de California y Nueva York y el Distrito de Columbia fallaron en favor del programa, con lo que la Suprema Corte retomó el caso en 2020 y el veredicto fue su restablecimiento.

La relación de las organizaciones latinas como La Raza (ahora llamada Unidos U.S.), el Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (Mexican American Legal Defense and Education Fund, MALDEF) y la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (National Association of Latino Elected and Appointed Officials, NALEO) con organizaciones de *dreamers* como la Alianza Nacional de Inmigración Juvenil (National Immigrant Youth Alliance, NIYA) se ha caracterizado por acuerdos y desacuerdos en torno a su activismo (Nicholls y Fiorito, 2015). Ahora bien, los latinos como minoría política se han aliado con los *dreamers* para abanderar la causa de estos jóvenes dentro y fuera de las instituciones.

En el ámbito del activismo de las organizaciones de los migrantes latinos, pero ahora en el campo de las movilizaciones en conjunto con los gobiernos locales, encontramos el nuevo “movimiento santuario”. En las denominadas “ciudades santuario” se desarrolla un amplio espectro de prácticas que van desde el no cuestionar ni divulgar el estatus migratorio de las personas en las oficinas públicas, hasta políticas de acogida que incluyen servicios migratorios que estas ciudades ofrecen (Paik, 2017). El movimiento santuario aglutina a un conjunto heterogéneo de prácticas, leyes y políticas que comparten su motivación originaria, pero que difieren en sus efectos de protección hacia las poblaciones migrantes.

Las “ordenanzas santuario” nos permiten observar las diferentes dinámicas políticas de los latinos. Así, encontramos que ciudades de Florida como Hialeah, que tiene un 74.4 por ciento de migrantes, en un estado con el 56.4 por ciento de población migrante, no es una ciudad santuario, debido a que los latinos que viven allí son mayoritariamente migrantes cubanos de preferencias

republicanas. En el lado contrario, observamos que Illinois y California, donde los latinos son predominantemente de origen mexicano y demócratas, incluso se han convertido en estados santuario. En estos últimos casos la alianza de políticos latinos electos y la movilización de organizaciones étnicas ha sido crucial para la aprobación de leyes a nivel subnacional.

Las denominadas ciudades santuario son actualmente la principal fuente de oposición a las políticas federales antiinmigrantes en Estados Unidos; sus legislaciones y ordenanzas están más relacionadas con agendas políticas locales y muy focalizadas para los latinos en estas ciudades. Los efectos prácticos que alcancen estas legislaciones locales en oposición a leyes federales antiinmigrantes dependerán del capital sociopolítico de los inmigrantes en la ciudad. Los latinos las han utilizado aun para respaldar otras iniciativas políticas, como una más justa inversión de recursos públicos en sus comunidades.

### **Talleres de ciudadanía y sus efectos sobre el capital político**

Históricamente los latinos tienen las tasas más bajas de naturalización de entre todos los grupos étnicos en Estados Unidos (DeSipio, 2011; Levin, 2013). El proceso de naturalización implica la adquisición de derechos civiles y políticos plenos para los residentes permanentes. Tras la elección de Donald Trump en 2016, los latinos tomaron con mucha precaución los reportes de que había alrededor de tres millones quinientos mil residentes permanentes latinos elegibles para obtener la ciudadanía en el país (Flores, 2016); las bajas tendencias de naturalización contribuyen al aletargamiento del “gigante dormido” que representa el capital político latino en el país.

El temor de fallar en el cuestionario cívico, la desestimación de su nivel de inglés, las dudas sobre su elegibilidad que recurrentemente los vuelven sujetos de fraude y los altos costos del proceso para un colectivo con bajos ingresos fueron las cuestiones sobre las que informaron los líderes latinos como los principales obstáculos. Este tipo de problemas podría resolverse fácilmente con el acompañamiento de las organizaciones étnicas, a las cuales los latinos ven como fuentes legítimas de información y como emprendedores eficientes de campañas comunitarias. En este escenario, las organizaciones latinas, en alianza con instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, están desarrollando

eventos como “Conozca sus derechos” y “Talleres de ciudadanía” a lo largo del territorio estadounidense.

Los talleres son eventos instituidos por organizaciones de inmigrantes, políticos proinmigrantes, consulados y ligas de defensa de derechos, en los cuales los residentes permanentes son invitados a “dar el siguiente paso” y naturalizarse. En estos talleres —sin fines de lucro y que trabajan bajo el modelo de clínicas legales—, se brinda apoyo logístico y legal para revisar la elegibilidad del candidato; ofrecen servicios legales probono para la regularización migratoria y se da acompañamiento durante todos los procedimientos del largo camino para convertirse en ciudadano.

Los líderes latinos argumentan que muchos inmigrantes no tienen conciencia de la cantidad de derechos que, independientemente de su estatus, tienen en el país, y que esto afecta a toda la comunidad. Como una líder latina explica: “Ahora sabemos que no es suficiente decirle a alguien: ‘Éste es tu derecho’. Debemos darles las herramientas necesarias para saber cómo defender esos derechos y cómo ejercerlos en una situación extrema como la que enfrentamos” (entrevista, Chicago, abril de 2017, en Cruz, 2018). Las organizaciones son las que mejor han comprendido el estatus mixto de las comunidades latinas y han involucrado a los diferentes perfiles en las campañas. Muchos jóvenes hijos de migrantes participan como voluntarios en el proceso de ciudadanía de sus coétnicos, de la misma forma en que muchos migrantes indocumentados han participado en campañas para “sacar el voto latino”, iniciativas que implican el registro de votantes y la difusión de información electoral partidista.

Hasta el momento no hay cifras precisas de cuántas personas se están beneficiando de los talleres de ciudadanía. El retraso en las cortes estadounidenses hará que el proceso se vaya dando a cuentagotas en los próximos años. A pesar de ello, además de mejorar las cifras de ciudadanos estos talleres crean vínculos más fuertes entre las organizaciones étnicas y los latinos; aumentan la vinculación al activismo contencioso para presionar por la justicia social, pero también la participación no contenciosa al incrementarse el flujo de información y el conocimiento de nichos para involucrarse en la política coétnica.

Los talleres de ciudadanía han sido cruciales para mejorar el capital social y político de los latinos. Esta mayor conciencia tendrá resultados a mediano plazo con el aumento de los votantes latinos elegibles, y efectos a largo plazo que se verán reflejados en una mayor cultura política del subgrupo social.

Los talleres se han utilizado para aumentar la confianza de los latinos y para involucrar a nuevos miembros al segmento políticamente activo; educan a las comunidades latinas sobre sus posibilidades en la esfera pública, aumentan la conciencia colectiva sobre cómo la política estadounidense está afectando sus vidas y a sus comunidades; además, inspiran a muchos jóvenes latinos que están adquiriendo habilidades en el seno de las organizaciones para postularse en la política institucional e impulsar cambios desde esos escenarios. Estas campañas están contribuyendo a la alfabetización cívica y a la cultura de la legalidad de todos los latinos.

## **Balance de la política latina**

Los perfiles contemporáneos de los latinos en Estados Unidos se han diversificado ampliamente en términos de generación, clase, estatus migratorio e ideología. Hoy en día, los latinos tienen variadas y contrastantes posturas públicas e intereses políticos. Sin embargo, sí hay agendas concretas que ineludiblemente movilizan contenciosa y no contenciosamente al colectivo en su conjunto.

Samuel Huntington (2004) sentenciaba que sólo existe un sueño americano, aquel creado por la mayoría angloprotestante estadounidense, y que los latinos sólo pueden participar en ese sueño si sueñan en inglés. Los latinos y otras minorías étnicas menos visibles han demostrado que las fisuras del sistema político estadounidense, combinadas con sus contradicciones sociales y económicas, han servido como un nicho dentro del cual han podido construir una identidad política propia, basada en sus especificidades culturales. En su siglo de presencia en Estados Unidos, los latinos han logrado aprender a movilizarse como bloque a través de la protesta, pero también en torno a la propuesta.

Los latinos han tenido éxito en incorporar a sus coétnicos a la política institucional, en detener leyes que criminalizan a sus comunidades, en hacer escuchar sus demandas a los políticos del *mainstream*, en las campañas de justicia tributaria y de concientización de sus contribuciones a la sociedad y a la maquinaria económica estadounidense; aunque embargo aún tienen que romper las barreras que los mantienen como *outsiders*, con un capital político permanentemente cuestionado por la política dominante y que perpetúan la situación de comunidades empobrecidas, viviendo en complicados

barrios subfinanciados. Tienen más control sobre sus representantes que otras minorías por el diseño de distritos minoría-mayoría a los que están sujetos; sin embargo, su mayor dificultad ha sido lograr enviar a representantes latinos a otros niveles y, sobre todo, a puestos de mayor influencia (Rocca *et al.*, 2008). Los principales problemas han sido la dificultad para hacer coaliciones con otras agendas que no son étnicas y la barrera de que sus identidades políticas estén confinadas a la migración. Matt Barreto (2012) sugiere que las señales étnicas en la política latina son una calle de doble sentido: por un lado, los latinos responden a la identidad compartida y a los mensajes étnicos enviados por los políticos coétnicos; sin embargo, el político latino que busca movilizar el voto étnico debe gestar una campaña que implícita y explícitamente incorpore al colectivo. Esto genera bajos niveles de apoyo de otras minorías y escasas alianzas con ellas.

Los ejemplos anteriores nos permiten extrapolar el comportamiento de los políticos latinos en la política congresional. Los latinos provenientes de distritos mayoritariamente étnicos que ganan la elección por un asiento para la Cámara de Representantes ven condicionada su permanencia en la curul por su labor en favor de la agenda étnica y su trabajo de caso al interior del distrito; no obstante, el bajo éxito en la construcción de alianzas con otros actores políticos tiene como resultado que rara vez asuman posiciones de liderazgo en la cámara. Por otro lado, los políticos latinos que sólo lo son por su nombre de origen hispano y no están sujetos a la política coétnica no representan sustantivamente a la población latina en las instituciones y, por tanto, este segmento poblacional no tiene influencia sobre ellos. Estas dos dinámicas, que persisten en la actualidad política, retrasan el liderazgo del colectivo y limitan su influencia a nivel nacional.

Hoy día, la identidad política latina es interaccional, es decir, es un proceso vivo resultado de la socialización continua del colectivo al interior de sus comunidades étnicas y en las esferas políticas en las que se presentan como unidad. La red de organizaciones étnicas, las comunidades latinas y sus *insiders* políticos han sido cruciales para forjar coaliciones al interior de la diversidad del grupo. Ahora bien, el mayor reto político para esta minoría consiste en que, una vez que han logrado ingresar a los corredores del poder deben hacer más efectiva su influencia a través de la activación política de más latinos y de estrategias que den entrada al sistema a otras agendas políticas que no sean solamente la de una reforma migratoria.